

Desigualdades económicas y políticas públicas para alcanzar el desarrollo local

Erick Darío López Montes de Oca¹

Norma Aguilar Morales²

Rosiluz Ceballos Povedano³

Resumen

El presente trabajo analiza la relación existente entre las desigualdades económicas y las políticas públicas. El objetivo del presente estudio radica en analizar la relación existente entre las desigualdades económicas y políticas públicas para la determinación de variables de estudio que apoyen su abatimiento. Se identifica que, para elaborar las políticas públicas, en el proceso se requiere del pensamiento complejo empleando indicadores multidimensionales para comprender la problemática actual y tomar decisiones con la finalidad de establecer líneas de acción para alcanzar el desarrollo. Tal es el caso de los indicadores multidimensionales de la pobreza y desigualdad. El principal reto para las instituciones públicas nacionales, estatales y municipales radica en emplear los indicadores adecuados para la elaboración de políticas públicas que permitan obtener el desarrollo local.

Conceptos clave: 1. desigualdades económicas, 2. políticas públicas, 3. desigualdad económica en México, 4. indicadores de desigualdad.

Introducción

En las últimas décadas, la desigualdad económica y pobreza han sido uno de los principales problemas del mundo. La agenda 2030 para el desarrollo sustentable, tiene como prioridad reducir la pobreza y las desigualdades económicas, siendo el primero de los 17 objetivos establecidos en las políticas públicas en el ámbito internacional (Naciones Unidas, 2018). Diversos países han implementados medidas para superar las desigualdades, sin embargo, se identifica que existen dificultades respecto la comprensión de la relación entre las desigualdades económicas y políticas públicas. Son muchos los debates y aportaciones que se han hecho por parte de los especialistas y científicos respecto a la importancia de la medición de la pobreza y desigualdad económica sin llegar a un consenso claro entre la relación de ambas variables (Alkire et al., 2023). La relación de las desigualdades económicas y las políticas públicas es confusa, hasta la actualidad no hay una comprensión clara de la relación de estas variables para lograr el desarrollo local. Se ha explicado muy poco al respecto sobre la relación entre las variables de desigualdad económica y política pública, lo cual es de suma importancia para la toma de decisiones que conduzcan al desarrollo local, por lo que se establece el objetivo de analizar la relación existente entre las desigualdades

¹ Profesor investigador y estudiante del Doctorado en Estudios Económico Administrativos, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División de Ciencias Económicas Administrativas.

² Profesora investigadora, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División de Ciencias Económicas Administrativas.

³ Profesora investigadora, Universidad del Caribe, Departamento de Economía y Negocios.

económicas y las políticas públicas para la determinación de variables de estudio que apoyen su abatimiento.

Las políticas públicas juegan un papel fundamental para el alcance del desarrollo local tanto para los países, regiones como para los estados, sin embargo, el principal reto que se tiene es la definición del problema mediante la elaboración de un diagnóstico, así como el seguimiento y evaluación del impacto (Mueller, 2020). Por lo tanto, la cuestión de las políticas públicas parte desde la definición del problema que comienza con un análisis riguroso que se realiza con la ayuda de diversas herramientas como son los indicadores para establecer líneas de acción puntuales. En este sentido, la medición del bienestar y calidad de vida ha sido punto de discusión por la comunidad científica, ya que, ha sido difícil concretar una definición precisa, como consecuencia de la complejidad objetiva y subjetiva que implica el bienestar de la sociedad.

Aunque muchos investigadores han estudiado este fenómeno desde el siglo XIX, es a partir del año de 1948 donde se establecen por primera vez las bases en el contexto internacional para la toma de decisiones con la finalidad que la sociedad tenga un nivel de vida adecuado, gracias a la Declaración Universal de los Derechos Humanos⁴ (Mende, 2021). Posteriormente, a partir de los años 1950 comienzan los debates públicos respecto a la desigualdad y la medición de los niveles de bienestar social, para identificar la mejor forma de establecer indicadores sociales los cuales se irían perfeccionando con el paso de los años con la finalidad de toma de decisiones en materia de políticas públicas de corte internacional y nacional (García, 2021).

De hecho, a mitad del siglo XX, se comienza a emplear el PIB per cápita, y la calidad de vida objetiva con la medición de variables ambientales y urbanas. Fue hasta los años 1980 que emerge la teoría del desarrollo humano considerando las capacidades de los individuos de acuerdo con el acceso a satisfacer sus necesidades básicas para el desarrollo (Alkire, 2005). Con el paso de los años, muchos investigadores y especialistas han aportado diversos indicadores que han sido excelentes herramientas en materia de políticas públicas, que ha sido todo un reto el empleo de estas por parte del gobierno de países y regiones para lograr el desarrollo local y reducir las desigualdades económicas.

El objetivo del presente estudio radica en analizar la relación existente entre las desigualdades económicas y políticas públicas para la determinación de variables de estudio que apoyen su abatimiento. Para ello, el documento se divide en tres partes, primero se aborda: las desigualdades económicas, desarrollo y pobreza, en segunda instancia, se analizan las políticas públicas para la reducción de las desigualdades económicas, en tercera se argumenta sobre la medición de la desigualdad para la construcción de las políticas públicas y, por último, se culminan con las conclusiones.

⁴ Aunque la Declaración Universal de los Derechos Humanos no habla específicamente de la desigualdad y pobreza, de manera indirecta establece que cada integrante de la sociedad tiene derecho a una buena calidad de vida.

1. Las desigualdades económicas, desarrollo y pobreza

1.1. Antecedentes

La desigualdad económica se ha convertido en uno de los problemas más importantes de la sociedad en el contexto internacional (Makhlouf, 2023). Uno de los principales debates cuando se considera la desigualdad es determinar específicamente el tipo de desigualdades que se necesitan analizar para la toma de decisiones para el desarrollo. Cuando se habla de desigualdad económica, se habla principalmente de indicadores de bienestar social, tales como el ingreso, empleo y acceso a servicios básicos. Entre la desigualdad y la pobreza hay una estrecha relación, y no deben entenderse como lo mismo (Hong et al., 2019). Por una parte, la desigualdad se refiere a la variación de los indicadores de bienestar social, lo que significa que puede existir una diferencia entre varias regiones sin que éstas se encuentren en condiciones de pobreza específicamente. Mientras que la pobreza en sí es más compleja de medir, ya que puede ser medida de forma objetiva y subjetiva, pero en términos generales, la comunidad científica menciona que la pobreza consiste en la limitación de cada individuo para satisfacer sus necesidades básicas (Bilan et al., 2020). Se puede decir que puede haber desigualdad y pobreza al mismo tiempo, así como no estar presente ninguna de estas dos condiciones.

Halkos & Aslanidis (2023), siguiendo las ideas de Sen (2000), mencionan que se puede entender que la pobreza no sólo implica una línea de ingresos bajos, sino más bien, la satisfacción de los individuos de sus necesidades básicas. Es decir, implica una limitación al acceso a alimentación, salud, educación, bienes materiales e ingreso, sólo por mencionar algunas variables. Mientras que la desigualdad comprende de cómo estás oportunidades y limitaciones están presentes en la sociedad en forma de concentración o dispersión inter (dentro de la unidad geográfica) e intra regionales (entre varias unidades geográficas) (Zhou & Liu, 2022).

La desigualdad económica ha sido un objeto de estudio desde diversos puntos de vista, en total se identifican aproximadamente 16 teorías que pueden ser organizadas en dos grupos importantes: perspectiva de la moral-ética de la sociedad y políticas públicas (Nussbaum, 2006; Caballero, 2006). El primer grupo de teorías analiza puntos como la igualdad de recursos, justicia, discriminación, estructura social y conflicto de clases, sólo por mencionar algunos (Stiglitz, 2000; Sen, 2005). Mientras que el cuerpo teórico de políticas públicas analiza la interrelación del gobierno, el sector privado, la sociedad y el territorio como piezas clave en reducir las desigualdades para el desarrollo económico (Capello, 2008). Específicamente este segundo cuerpo de conocimiento es donde se han hecho aportaciones para efectos de reducir las desigualdades económicas en las regiones. Son varias aportaciones al respecto, pero específicamente las contribuciones de las desigualdades económicas y el bienestar social comienza con la medición del bienestar y calidad de vida, que se hicieron posible con la comprensión que el desarrollo es más que sólo el enfoque económico utilitarista. De hecho, en el año de 1950-1960, comienza el debate respecto al bienestar y calidad de vida de la sociedad, y su medición para la toma de decisiones en materia de políticas públicas (García et al., 2021). En el año de 1961 se realizó un informe conjunto por organizaciones internacionales con la finalidad de medir el bienestar social, en

donde se establecieron 9 variables para su medición⁵ (Naciones Unidas, 1961). Posteriormente, a finales de 1970 la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) elaboró un índice con la finalidad de medir al bienestar de la sociedad de los diversos países que considera 33 variables. A pesar de los informes emitidos por las organizaciones internacionales, no fue posible concretar una definición y medición de bienestar social de manera sólida (García et al., 2021).

Fue hasta el año de 1979 con las aportaciones hechas por Sen, quién plantea que los individuos deben tener capacidades de poder lograr sus metas y actividades importantes y que la calidad de vida comprende de un conjunto de factores que limitan o permiten a las personas alcanzar el desarrollo (García, 2015). Es así como Sen (2000), aporta el enfoque de las capacidades para análisis de las desigualdades económicas y pobreza, que serviría como un pilar clave para el análisis del desarrollo y toma de decisiones en materia de políticas públicas por organismos internacionales y países en la reducción de las desigualdades económicas. Esta aportación de Sen (2000), supera el análisis de la pobreza de forma utilitarista ya que considera un conjunto de variables para analizar la desigualdad con el índice multidimensional de desarrollo humano (IDH). Actualmente, el IDH es uno de los índices más reconocidos para efectos de medir la desigualdad económica para varios países del mundo. Aunque cabe destacar que hay algunos países que han construido sus propios índices para poder medir las desigualdades y tomar decisiones al respecto (Facchinetti & Siletti, 2022). Asimismo, la comunidad científica ha aportado diversas metodologías e índices para la medición de la desigualdad económica y pobreza que han contribuido en la toma de decisiones estratégicas. La medición de las desigualdades es y ha sido uno de los principales retos para los gobiernos y organismos para construir políticas que conduzcan hacia el desarrollo.

1.2. Factores que influyen en las desigualdades económicas

Las desigualdades económicas no son un resultado de la casualidad, más bien es el resultado de la dinámica de varios factores los cuales influyen para que estas se presenten en una región determinada. Los factores reconocidos que influyen en que se manifiesten las desigualdades económicas son la globalización, la tecnología, las políticas fiscales, los empleos, y las políticas públicas del Estado para mitigar las desigualdades económicas (Odhiambo, 2023; Vu, 2023). La globalización como apertura de las fronteras e incentivo de la conectividad de los países que facilita la movilización económica tiene impactos favorables y negativos como lo son la amplitud de las desigualdades económicas (Dix-Carneiro & Traiberman, 2023). La dinámica internacional respecto al flujo económico entre países es cada vez más compleja, lo que exige que tanto la sociedad como los gobiernos y empresas se adapten a los cambios de esta dinámica para aprovechar las oportunidades. En este contexto, los países menos desarrollados son quienes experimentan un incremento de la brecha económica y social debido a que estos no logran adaptarse totalmente a la dinámica de la globalización. Ante la globalización, los países en desarrollo requieren formar recursos humanos cada vez más capacitados, impulsar la educación, ciencia y tecnología para

⁵Estas organizaciones son la Organizaciones Unidas (ONU), Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización Internacional del Trabajo (OIT), las Organizaciones Unidas para Educación, Ciencia y la Cultura (UNESCO).

solucionar las problemáticas sociales locales. Por lo tanto, se requiere un conjunto de políticas públicas que dirijan a ciertos países hacia el desarrollo y por supuesto los recursos económicos necesarios para la gestión de los programas para lograr los objetivos de las políticas. De hecho, uno de los tópicos actuales que constituye un factor de relevancia que coadyuva al desarrollo, es la tecnología, porque permite que los países aporten soluciones al mundo mediante el conocimiento y transformación de recursos en un bien tangible e intangible (Rochat, 2023). Esto a su vez impulsa a la formación del recurso humano, en profesionistas y trabajadores capacitados en temas especializados. Son pocos los países que obtienen los beneficios del avance tecnológico, mientras que los países que no aprovechan las oportunidades de la tecnología experimentan un incremento de la brecha socioeconómica en su población, ya que, ante población no especializada se incrementa el desempleo y la desigualdad de los salarios. En efecto, los países requieren formar recursos humanos para ser un punto de atracción de inversión nacional y extranjera para diversas empresas, así como fomentar el emprendimiento con la finalidad de generar empleos formales y remunerados (Artige et al., 2023).

Por último, con las políticas públicas y fiscales se tienen dos casos particulares. Con las políticas públicas para hacer frente a las desigualdades, se busca proteger a la población vulnerable para que los individuos menos favorecidos tengan una calidad de vida digna disminuyendo así el porcentaje de los pobres de una región determinada (Yuda et al., 2023). Algunas políticas sociales para la reducción de las desigualdades son, becas para los estudiantes, acceso a servicios de salud, alimentación y programas sociales de transferencias (Dorlach, 2023). Estas políticas sociales se sustentan con las políticas fiscales que mediante los impuestos recaudan todos los recursos que el gobierno necesita para poder llevar a cabo sus actividades diarias (McKay & Wolf, 2023). Esta recaudación de ingresos se lleva a cabo mediante los impuestos y una las políticas son el establecimiento de los impuestos progresivos, es decir la recaudación de acuerdo con la percepción de ingresos de los individuos y las empresas para efectos de establecer los presupuestos y el gasto público (Kappes, 2023).

Los factores mencionados son los más importantes que influyen en las desigualdades económicas de los países y regiones. Se puede afirmar que las desigualdades representan una problemática compleja, que puede reducirse mediante las políticas públicas pertinentes, fundamentadas correctamente mediante un diagnóstico que comprenda y defina las problemáticas más importantes y sobre todo la evaluación y seguimiento de éstas con el propósito de medir el desarrollo que se ha logrado.

2. Las políticas públicas para la reducción de las desigualdades económicas

2.1. El papel del gobierno en la elaboración de las políticas públicas

La teoría del Estado marca que el papel principal del gobierno radica en establecer el orden y estabilidad económica y social. En este sentido, el gobierno mediante las políticas públicas busca alcanzar ciertas condiciones deseadas para la sociedad. Mediante las políticas, se debe brindar soluciones a la sociedad satisfaciendo las principales necesidades de la población. Estas soluciones son la razón de ser de las políticas públicas. Birkland (2020), argumenta que las políticas públicas tienen cuatro características principales: 1) son la responsabilidad

principal del gobierno, 2) se elaboran a partir de un diagnóstico para identificar las problemáticas sociales, 3) se consideran a la sociedad y el sector privado para la elaboración de éstas, y 4) tienen objetivos y metas. A las políticas públicas se les considera instrumentos para implementar soluciones de acuerdo con las problemáticas identificadas en la sociedad (Persson & Tinghög, 2020). Asimismo, suele mencionarse que las políticas públicas son la toma de decisiones de los gobiernos, y representan lo que este quiere implementar o no (Hudson et al., 2019). En este orden de ideas, mediante las políticas públicas, el gobierno marca líneas de acción estratégicas para cambiar la realidad actual en un futuro cercano alcanzar el desarrollo y reducción de las desigualdades económicas (Arranz et al., 2022). Son muchas las definiciones de las políticas públicas, no obstante, hay un consenso claro entre especialistas y autores del campo de las políticas públicas y su relación con la desigualdad económica.

Aguilar (1992), argumenta respecto las políticas públicas, que son una respuesta para el gobierno y sus organismos para la toma de decisiones de forma racional con la finalidad de lograr buenos resultados. Aguilar (2012), plantea cinco definiciones de las políticas públicas a saber, 1) un conjunto de decisiones interrelacionadas entre sí, orientadas hacia la solución de problemas, 2) Iniciativas elaboradas por el gobierno y los ciudadanos, 3) iniciativas nuevas o reestructuradas que han sido diseñadas por el gobierno y sus organismos correspondientes, 4) Las acciones que han sido planeadas y ejecutadas por la integración de varios actores, como el gobierno, empresas y los ciudadanos, 5) las líneas de acción que estructuran y ordenan las actividades del gobierno y de la sociedad en general. Merino (2013), comenta sobre las políticas públicas, que buscan mejorar, corregir y modificar las situaciones desfavorables tanto sociales como económicas que han tenido un impacto en la sociedad y se ha denominado un problema público.

Otros autores mencionan que la política pública es un proceso que se impulsa en el momento que el gobierno identifica una problemática social, y que ejecuta y evalúa para superar dicha problemática (Tamayo, 1997), o bien, las directrices para responder a los problemas socioeconómicos de acuerdo con la visión que tenga el gobierno (Kraft & Furlong, 2006). También, se identifican las políticas públicas como la regulación de las actividades sociales para establecer un orden y bienestar para la sociedad en general (Parsons, 2007). Rodríguez (2021), aporta una definición de política pública de forma integral, argumentando que las políticas públicas comprenden las decisiones que toma el gobierno en el nivel federal, estatal y municipal, considerando los recursos escasos y las problemáticas principales que se encuentran en la agenda pública para poder lograr el bienestar económico y social de la población específica.

Arenas (2021), afirma que el gobierno para que pueda responder a las necesidades, se deben considerar a las políticas públicas como un proceso que inicia con el análisis e identificación de las necesidades de la sociedad, y posteriormente se pueda tomar las decisiones que se materializan en programas, leyes, regulaciones, normas, servicios públicos que satisfacen una necesidad social. En este sentido, se aprecia que la identificación y priorización de las necesidades sociales son el pilar principal para la elaboración de correctas políticas públicas.

Birkand (2020), basándose en las ideas de Easton, Greenberg, Gunnell, menciona que, para identificar las necesidades sociales, se requiere emplear el pensamiento complejo que

se ejemplifica con un modelo sencillo de input-output, con el cual se recopila información del ambiente externo, se analiza dicha información y finalmente coadyuva a la toma de mejores decisiones en materia de política pública, como regulaciones, leyes, y programas. Para llegar a formular estas acciones, en primera instancia se analiza la información del ambiente externo como la información demográfica y socioeconómica principalmente para identificar las problemáticas actuales y futuras, así como limitaciones y oportunidades para el desarrollo. En este contexto, las políticas públicas tienen como finalidad solucionar las problemáticas mediante líneas de acción para el aprovechamiento de las oportunidades identificadas. De acuerdo con los argumentos anteriores, se identifica que las políticas públicas son cíclicas, es decir estas políticas constituyen un proceso continuo el cual consta de 7 pasos y se aprecia que no hay inicio y final, sino más bien es un ciclo que se retroalimenta de cada una de las etapas. Estos pasos son: 1) elaboración de la agenda, 2) definición del problema, 3) formulación de las opciones de políticas, 4) elección de las opciones, 5) comunicación, 6) implementación y, 7) evaluación (Fischer, 2019). El primer paso de elaboración de la agenda, identificación de problemas y evaluación, hay una retroalimentación para mejorar las políticas públicas y respectivos programas con el paso del tiempo. Cabe destacar al respecto que uno de los principales retos de las políticas públicas son la elaboración de la agenda, definición del problema y sobre todo la evaluación, ya que, implica un esfuerzo en la toma de decisiones donde intervienen los intereses políticos.

2.2. *Elaboración y evaluación de las políticas públicas para el desarrollo*

En el proceso de las políticas públicas, la primera etapa que consiste en la elaboración de la agenda, los políticos son quienes deciden cuales son los problemas prioritarios para atender y que estos formen parte de la agenda. Este proceso de la elaboración de la agenda corresponde a un proceso racional, donde reluce el *homo economicus* con la finalidad de optimizar los recursos limitados para solucionar las principales problemáticas sociales y económicas, no obstante, la realidad muestra que los debates respecto a las problemáticas de la agenda se desvían de la racionalidad que se refleja con malas decisiones y sus impactos sociales y económicos negativos (Aguilar, 2012). Mueller (2020), sostiene que las políticas públicas fallan por el hecho de determinar los problemas y sus análisis de forma utilitarista y simple, en vez de considerar un enfoque de sistema complejo donde convergen varios factores. Hudson et al., (2019), así como Mueller (2020), destacan que las principales razones por las cual fallan las políticas públicas, 1) por la complejidad de las actividades que estas implican, 2) ausencia de especialistas respecto la problemática que soluciona la política pública, 3) corrupción, 4) expectativas optimistas, 5) poca coordinación en los niveles de gobierno, 6) insuficiente integración de los actores, 7) gestión inadecuada del ciclo de las políticas públicas. Estos problemas se reducirían al analizar las problemáticas y necesidades sociales desde una perspectiva de sistema complejo, superando el enfoque utilitarista.

Los problemas y necesidades sociales forman parte de la agenda pública de acuerdo con el sistema de planeación que los políticos implementen. A partir de ahí, se desglosa la agenda en varios tipos. Tal es el caso de la agenda sistemática, que considera de forma general los problemas y necesidades sociales de toda una sociedad. Posteriormente, se encuentra la agenda institucional, la cual consiste en una jerarquía de los problemas que los políticos consideran como prioritarios. La agenda gubernamental hace énfasis en una selección de los

problemas sociales por parte del sistema político con una asignación presupuestal para la elaboración de las políticas públicas y programas. Asimismo, están la agenda política la cual contiene las problemáticas sociales que el sistema político actual conserva, y la agenda de largo plazo que considera ciertos problemas identificados para políticas que se podrían implementar en el futuro (Gutiérrez & Muñoz, 2022).

La agenda pública, en términos generales es un conjunto de decisiones por parte de políticos para identificar, priorizar los problemas y sobre todo definir la causa de estos y sus posibles soluciones. En la mayoría de los casos, en la configuración de la agenda pública, se aprecia una carencia de formalidad, y desorden para establecer dichos problemas, conflicto de intereses tanto políticos como personales (Rodríguez, 2017). En este sentido, el trabajo de los *policymakers* es elaborar un meso-análisis entre la elaboración de la agenda con la definición del problema, con evidencia e información suficiente para la toma de decisiones asertivas. En este análisis se debe considerar, abordar el problema desde el pensamiento complejo, además de, determinar objetivos y metas, evaluar las alternativas, para elegir la mejor opción para la solución del problema. Este análisis debe ser de forma objetiva, sin sesgos de intereses políticos y personales. Una vez definido el problema, y la elección de la mejor alternativa se lleva a cabo la implementación de la política pública.

La implementación de la política pública hace énfasis en lograr los objetivos planteados en los resultados esperados que se traducen en la solución de la problemática social. Algunos modelos muestran la forma en que se implementan dichas políticas públicas. Tal es el modelo de política racional, el cual explica que los *policymakers* tienen alcance para poder establecer mecanismos correctos con la finalidad de que el personal operativo pueda ejecutar la política pública de la mejor forma (Rodríguez, 2021). Mientras que, el modelo organizacional consiste en la ejecución de actividades secuenciales, procesos estructurados, así como grupos de trabajo especializados, que responden a jerarquías preestablecidas. Por otra parte, el modelo burocrático considera un conjunto de patrones en las actividades de política pública, es decir, se aprecia una rutina en la gestión pública que brinda la oportunidad de mejorar las actividades y procesos que retrasan las acciones del gobierno para efecto de implementar de la mejor forma las políticas públicas (Aguilar, 2012). Además, se encuentran los modelos *bottom-up* en donde los políticos y altos funcionarios determinan la agenda y toman las decisiones de políticas públicas, y *top-down*, en donde se consideran la opinión y propuestas de la sociedad local para la solución de las problemáticas y la puesta en marcha de las políticas públicas (Aguilar, 1992). Una combinación de estos dos últimos modelos *bottom-up-top-down*, permitiría la estructuración de una agenda pública de la mejor forma, así como, la puesta en marcha de políticas que respondan correctamente a las problemáticas haciendo uso racional de los recursos escasos. Una vez que se define el problema, se procede al establecimiento del tipo de la política pública que se implementará.

Normalmente, se aprecian las políticas públicas sectoriales como las políticas económicas, monetarias, educativas, de salud, de empleo, comunicaciones y transportes, sólo por mencionar algunas, sin embargo, este punto de vista es limitado (Birkland, 2020). Lowi, (1971), clasifica las políticas públicas en tres, distributiva, redistributiva y regulatoria. Las políticas distributivas benefician a un grupo específico de la población, con el objetivo de que estos sean beneficiados dentro de un sector en específico. En este tipo de políticas, se toman los recursos monetarios recaudados a partir de los grupos mejor acomodados de la sociedad

y estos se reparten a un grupo reducido mediante los programas y sus respectivos apoyos. Las políticas redistributivas, las cuáles son las que más causan controversia, ya que, tienen como función principal redistribuir recursos monetarios, así como poder, entre la población de menores ingresos mediante la participación y considerando sus opiniones respecto un problema o iniciativa que están en el foco del gobierno. La controversia radica en el hecho de que la mayoría de los individuos que componen la clase social alta no están de acuerdo con la redistribución económica y de poder hacia la parte de la población necesitada. Finalmente, las políticas regulatorias tienen como finalidad guiar las actividades de las empresas, y se dividen en dos, las políticas de regulación competitiva, las cuales tratan de dirigir el comportamiento de los proveedores de bienes y servicios y las políticas de protección para salvaguardar a la sociedad de las actividades corporativas que impactan a la sociedad de forma negativa. Posterior a la implementación de las políticas públicas, se evalúan si éstas realmente tuvieron el impacto favorable que se esperó desde el inicio.

Vedung (2022), menciona los siguientes grupos de modelos de la evaluación de políticas públicas, modelos de efectividad, modelos económicos y profesionales. El primer grupo de modelos, “modelos de efectividad” evalúan el impacto considerando las metas y los objetivos plantados, la satisfacción de las necesidades y expectativas de la sociedad, tal es el caso de las opiniones de los grupos específicos que son beneficiados por una política pública determinada. Los modelos de “evaluación de efectividad” se enfocan en medir tanto el impacto como el uso de los recursos económicos (aunque casi siempre se omite la gestión de los recursos económicos) considerando indicadores sencillos para medir a productividad de la política pública. Estos indicadores se calculan a partir del cociente de los beneficiados y los costos de los programas de las políticas públicas. Por último y no menos importante, la “evaluación por profesionales” se lleva a cabo por un conjunto de especialistas que definen las variables para medir el impacto de las políticas implementadas basadas en publicaciones y métodos científicos algunas veces.

La evaluación de las políticas públicas representa uno de los principales retos porque implica determinar un conjunto de técnicas y herramientas para poder medir el impacto de la mejor forma posible. Se puede decir que, cada una de las actividades de la política pública están interrelacionadas, al definir correctamente el problema social con el establecimiento de la agenda, se podrán determinar el tipo de políticas públicas y la forma en que éstas se implementarán y evaluarán.

3. La medición de la desigualdad para la construcción de políticas publicas

3.1. Las principales problemáticas sociales de la desigualdad

Actualmente las desigualdades económicas son una de las principales problemáticas en el mundo y en especial en Latinoamérica. Específicamente, se manifiestan diversas problemáticas estrechamente relacionadas con las desigualdades económicas como lo son, el desarrollo sustentable, la movilidad social, la equidad e igualdad de género. La problemática del desarrollo sustentable destaca la relación existente entre el desarrollo, el medio ambiente y la sociedad (De Neve & Sachs, 2020). Cada uno de estos pilares son de suma importancia y deben mantener un equilibrio para el logro del desarrollo. La relación entre la pobreza y el desarrollo sustentable radica en el pilar social, ya que, el nivel de vida de cada individuo debe

ser el adecuado porque permite reducir los efectos negativos de la pobreza, lo que a su vez genera impactos sociales y económicos negativos. Estos impactos son, la delincuencia, los problemas de salud emocional y mental, menor movilidad social, y la desigualdad e inequidad de género (Velandia-Morales et al., 2021).

La movilidad social se refiere a la facilidad de las personas pertenecientes a un estrato socioeconómico para que puedan ascender a una mejor posición socioeconómica (Ríos et al., 2023). Esta facilidad de la movilidad social está relacionada con el desarrollo económico, debido a que, en un país con mejores condiciones, cada individuo puede tener mejores oportunidades de acuerdo con su preparación, es decir, mejores ingresos, empleo y oportunidades de formación educativa. La movilidad social se puede estudiar desde la perspectiva inter e intra generacional para comprender mejor el fenómeno de estudio. Un país que mejora en términos de desarrollo se evidenciará en la facilidad de cada persona para alcanzar mejores oportunidades para mejorar su calidad de vida y bienestar. En este orden de ideas, la movilidad social desde la perspectiva intergeneracional analiza como los integrantes de las generaciones de las familias mejoran su estrato socioeconómico. En el caso de la movilidad social desde la perspectiva intrageneracional, muestra como un individuo cambia sus condiciones socioeconómicas escalando hacia estratos superiores. La movilidad social, está estrechamente relacionada con la igualdad y equidad de género, pues muestran también las oportunidades y barreras que los individuos tienen para progresar específicamente considerando la desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (Fachelli et al., 2023).

En las últimas décadas la brecha de oportunidades entre mujeres y hombres es un tema que es punto de discusión y de prioridad en las políticas públicas en el contexto internacional (Hortal, 2023). Esto como consecuencia de la desigualdad de oportunidades de mujeres y hombres, como acceso a los mejores puestos de trabajo, diferencias salariales, derechos y violencia, estereotipos, discriminación, acceso a la educación entre otros aspectos más (Bourguignon & Coron, 2023). Son muchos los países que han implementado diversas políticas públicas para que tanto las mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades. En este contexto, las políticas son las herramientas con las cuales el gobierno, soluciona las problemáticas de las desigualdades económicas

3.2. Pobreza multidimensional, subjetiva, objetiva y el enfoque de capacidades

Los niveles de desigualdad económica y pobreza son de preocupación para los gobiernos internacionales y tienen como meta principal reducir la brecha económica existente. Para lograr esta meta, el estudio y la medición de la desigualdad económica y pobreza ha sido un foco de atención por académicos y especialistas para establecer un consenso para su medición para la toma de decisiones en materia de políticas públicas. Es en la década de los años 1950-1960, donde se establecen las cuentas nacionales para la medición del desarrollo y donde comienza en el debate sobre la calidad de vida. Se tenía como punto principal la medición del desarrollo y calidad de vida. Por lo tanto, el PIB fue considerado por mucho tiempo como un indicador para medir el desarrollo. La pobreza unidimensional es un concepto que resalta cuando se considera a sólo una variable, principalmente el ingreso para medir el bienestar y calidad de vida de una región o regiones específicas. Aunque en la

actualidad este indicador ha sido criticado fuertemente por varias razones que se explican a continuación.

Las principales críticas respecto al PIB como indicador de desarrollo son: 1) no se muestran las desigualdades socioeconómicas, 2) no mide el progreso social, 3) no mide la calidad de vida, 4) no considera variables de sostenibilidad, y 5) no considera variables que midan el impacto negativo del crecimiento (Daly & Farley, 2009). De acuerdo con lo anterior, se aprecia que el PIB limita mucho la medición de las desigualdades económicas para tomar decisiones estratégicas de desarrollo, ya que, al solo medir la acumulación del capital, es decir sólo el crecimiento económico, se pasa desapercibida la distribución de los recursos económicos. Por lo tanto, no se identifican las desigualdades tanto intra e interregionales, las cuales muestran el grado de dispersión o concentración del ingreso dentro de la sociedad determinada. Asimismo, sólo al considerar una variable como punto de referencia para la toma de decisiones para el desarrollo, se ignoran otras variables relacionadas que permitirán definir la problemática existente. Al sólo considerar variables como el PIB, empleo, e ingresos, éstas por sí mismas no muestran el panorama real de la situación socioeconómica actual. En caso contrario, al considerar un conjunto de variables, a su vez, se definen mejor las problemáticas, así como sus propuestas de solución, es decir, las políticas públicas con sus respectivos programas para satisfacer las necesidades sociales. Se puede afirmar que una región puede experimentar crecimiento económico lo cual no significa que toda la sociedad presente un nivel de vida adecuado, siendo una pequeña parte de la sociedad quienes obtengan el progreso económico y social, es decir, desarrollo.

Sen (1979), fue quién argumento que, para el logro del desarrollo, se debería cambiar el paradigma de la comprensión de la pobreza, y menciona al respecto, que la pobreza no sólo consiste en determinar el porcentaje de población que tiene cierta cantidad de ingresos o gastos, sino más bien, determinar las limitaciones de los individuos, lo cual implica la libertad que estos tienen para lograr una calidad de vida favorable. Con estas críticas hacia la medición de la pobreza unidimensional, comienza el cambio de paradigma con la medición de la pobreza multidimensional. La pobreza multidimensional a diferencia de la pobreza unidimensional considera un conjunto de variables para determinar si la población cuenta con una calidad de vida favorable mediante indicadores estadísticos. Los principales enfoques que ha aportado la comunidad científica son el enfoque de capacidades, de derechos humanos y necesidades básicas que pueden ser analizados desde una perspectiva objetiva y subjetiva.

El enfoque de capacidades es una respuesta al utilitarismo que consideraba como indicador principal el PIB per cápita como medición del desarrollo, para evaluar el bienestar considerando la libertad, constituyendo un punto de vista igualitarista para la sociedad (Anand & Sen, 2000). Por su parte, el enfoque de derechos humanos considera el empoderamiento de los individuos para que estos participen en el proceso de desarrollo mediante sus opiniones en la formulación de las políticas públicas, así como en la transparencia y rendición de cuentas de los recursos empleados por las respectivas instituciones públicas (Organización de las Naciones Unidas, 2012). Mientras que el enfoque de necesidades básicas satisfechas determina en nivel de pobreza a través de variables que no necesariamente se identifican con el nivel del ingreso de los hogares, es decir, aspectos materiales y servicios básicos que satisfacen las necesidades primarias (Daly & Farley, 2009).

Ahora bien, estos enfoques pueden ser analizados desde la perspectiva subjetiva, objetiva o una combinación de estas. Considerar alguna de las perspectivas mencionadas es de suma importancia, debido a que, permitirá medir de mejor forma la desigualdad y en términos de políticas públicas, la aceptación de las familias a los programas sociales ya que depende de si los integrantes de los hogares forman parte de la población en condición de pobreza o no. En este orden de ideas, la pobreza subjetiva se refiere a como los miembros de las familias consideran su calidad de vida independientemente de los ingresos que estos perciban. En esta perspectiva se encuentran hogares que cuentan con ingresos superiores a la línea de pobreza pero que se perciben como pobres. En caso contrario, la pobreza objetiva concierne en la determinación de la pobreza mediante datos cuantitativos que permiten clasificar a los hogares mediante líneas de pobreza con índices estadísticos de acuerdo con el acceso de servicios básicos que estos tengan. Las perspectivas combinadas integran tanto la percepción de los integrantes de las familias y el acceso de las familias a los servicios básicos, siendo un cálculo más complejo debido a los datos censales que en la mayoría de los casos son limitados.

3.3. Los indicadores para la elaboración de las políticas públicas

Uno de los retos de las políticas públicas es la definición del problema, mediante la elaboración de un diagnóstico, seguimiento y la evaluación del impacto en la ejecución de estas. Parece que la definición del problema de desigualdades económicas es una actividad sencilla, sin embargo, representa una actividad ardua y especializada para la toma de decisiones (Mueller, 2020). Una definición del problema incorrecto trae consigo políticas y programas inadecuados lo que tiene como resultado poco impacto en la sociedad. En las políticas que tienen como finalidad la reducción de las desigualdades y pobreza, los indicadores juegan un papel crucial, porque se determina en primera instancia la situación actual de la sociedad respecto a la pobreza, y las limitaciones de los individuos que permite una mejor toma de decisiones, tales como las políticas y programas que se requieren ejecutar, y evaluación de estos para identificar el progreso o retroceso obtenido. En términos generales los indicadores estadísticos son herramientas las cuales muestran información precisa para la toma de decisiones estratégicas ya que, nos permite definir problemáticas, establecer objetivos, y evaluar el impacto de acciones emprendidas para superar los problemas identificadas mediante un análisis longitudinal. Específicamente, los indicadores nos muestran la situación real respecto una problemática social y permite apreciar cual es el grado de mejora o estancamiento en un periodo de tiempo (Sitthiyot & Holasut, 2020).

Los indicadores presentan las siguientes características particulares (Mondragón, 2002). En primera instancia, los indicadores se construyen a partir de un cuerpo teórico que sustentan las variables, así como, la metodología empleada para la medición de la desigualdad económica. En el contexto internacional, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) utiliza el índice de desarrollo humano el cual es un índice multidimensional objetivo, que se basa en el enfoque de capacidades para medir el progreso, empleando la suma de tres indicadores a saber, salud, educación e ingreso. En México, se encuentra el caso del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), por ejemplo, que considera la medición de la pobreza multidimensional objetiva con el empleo del indicador de rezago social constituido por cinco variables a saber, educación, servicios de salud, servicios básicos de la vivienda, calidad de la vivienda, y activos materiales en el hogar

(Peláez-Herreros, 2012). Ambos indicadores nos muestran información relevante para la toma de decisiones de políticas públicas, para satisfacer las necesidades sociales de los individuos. En segunda instancia, los indicadores deben ser específicos, es decir, que estén vinculados con una problemática social en particular como lo son las problemáticas económicas, sociales, culturales o ambientales, y los respectivos objetivos para medir, comprender y solucionar el problema. Además, los indicadores deben ser explícitos, el nombre de estos es de suma importancia, porque a simple vista mencionan que están midiendo, demás al construir los índices se deben tomar en cuenta el área geográfica, e información demográfica como el género, y sobre todo los indicadores deben estar disponibles por varios periodos de tiempo. Cabe destacar que un solo indicador puede ayudar a medir varias problemáticas, principalmente cuando se emplean un conjunto de variables para construir un índice multidimensional, como lo son los índices de pobreza y desigualdad, que permiten evaluar el impacto de las políticas sociales y económicas sobre la calidad de vida (Dang et al., 2023).

Respecto a la utilidad de los indicadores, estos son de suma importancia para elaborar diagnósticos, evaluar y sobre todo dar seguimiento del desempeño de las políticas públicas y en qué medida estas están solucionando una problemática (Mondragón, 2002). Este seguimiento permite realizar ajustes a las políticas y mejorarlas para que solucionen las necesidades sociales de una mejor forma. A su vez, dicho seguimiento también permite valorar el desempeño de las instituciones públicas responsables de elaborar y ejecutar las políticas públicas.

Actualmente, son muchos los indicadores propuestos para la medición de la pobreza multidimensional empleando diferentes metodologías, así como diferentes variables. El índice de desarrollo humano es el índice más empleado para la medición del desarrollo, no obstante, están presentes otros índices como el better life index de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), el índice de calidad de vida en el trabajo de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sólo por mencionar algunos de estos (Erkkilä, 2023). No obstante, a pesar de las diferentes índices, las principales variables empleadas para la construcción de estos son la salud (acceso a servicios de salud, mortalidad infantil y nutrición), educación (analfabetismo y grado académico), estándar de vida (acceso a servicios básicos como agua, y electricidad), bienes materiales (televisión, computadoras, estufa, refrigerador, entre otros), y vivienda (material del techo, paredes y piso), ingreso (salario) y empleo (trabajos formales e informales) (Alkire et al., 2023). Cada índice emplea una combinación de estas variables, aunque hay variaciones, el objetivo de estos es medir la pobreza y las desigualdades económicas de forma multidimensional, lo que ha permitido el progreso de muchas políticas públicas y programas sociales.

Conclusiones

La presente investigación tiene como objetivo analizar la relación existente entre las desigualdades económicas y las políticas públicas. En primera instancia, las desigualdades económicas muestran la concentración o dispersión de las oportunidades o limitaciones de la sociedad en las regiones. En las regiones con menores desigualdades es muy probable que la calidad de vida sea mayor en comparación con otras regiones. En este sentido, el reto para

las regiones con mayor desigualdad radica en la elaboración e implementación de políticas públicas para superar dicha situación de desventaja.

El principal argumento de las políticas públicas es determinar cuáles son los problemas y necesidades que adolece la sociedad para llevarlos a la agenda pública y así construir las políticas públicas pertinentes que solucionen las necesidades sociales. Para la comprensión de estas necesidades sociales, en primera instancia, se requiere realizar un riguroso análisis, para elaborar la agenda pública, y definir el problema para solucionar efectivamente las necesidades sociales. Una de las fallas en momento de elaborar las políticas públicas son emplear una visión utilitarista, y no emplear un enfoque de sistema complejo con la evidencia e información suficiente y empleando varias variables para la comprensión del problema. Es en este momento que los indicadores estadísticos retoman importancia para la definición y comprensión del problema empleando las metodologías, así como, los enfoques para la determinación de la pobreza y desigualdades económicas para su medición y toma de decisiones de política pública. Los indicadores multidimensionales de la pobreza son fundamentales en la elaboración de las políticas públicas encaminadas para la reducción de las desigualdades y logro del desarrollo local. Esto porque permite en la elaboración de la agenda la definición del problema, dar seguimiento, evaluar y mejorar las políticas públicas. Se puede afirmar que las políticas públicas que no tienen un impacto favorable en la sociedad, es porque fueron elaboradas con una comprensión insuficiente del problema, pasando por alto el pensamiento complejo y la ausencia de herramientas como los indicadores.

De acuerdo con los argumentos anteriores, se puede concluir el presente estudio afirmando que la relación entre las políticas públicas y desigualdades económicas descansa en la comprensión del problema, con el uso de indicadores para analizar y definir el problema con la finalidad de establecer las mejores propuestas para la toma de decisiones y alcanzar el desarrollo local. El principal reto de las instituciones públicas en el contexto nacional, estatal y municipal es hacer uso de los indicadores correctos para que los funcionarios tomen las mejores decisiones de políticas públicas para solucionar las necesidades y alcanzar el desarrollo local.

Referencias

- Aguilar, L. F.** (1992). *Aguilar 1992 La Hechura de las Políticas*. Miguel Ángel Porrúa.
- Aguilar, L. F.** (2012). *Política pública*. Siglo XXI Editorial. www.sigloxxieditores.com.mx
- Alkire, S.** (2005). Why the Capability Approach? *Journal of Human Development*, 6(1), 115–135. <https://doi.org/10.1080/146498805200034275>
- Alkire, S., Kövesdi, F., Scheja, E., & Vollmer, F.** (2023). Moderate Multidimensional Poverty Index: Paving the Way Out of Poverty. *Social Indicators Research*. <https://doi.org/10.1007/s11205-023-03134-5>
- Anand, S., & Sen, A.** (2000). The Income Component of the Human Development Index. *Journal of Human Development*, 1(1), 83–106. <https://doi.org/10.1080/14649880050008782>
- Arenas, D. C.** (2021). *Evaluación de programas públicos*. CEPAL. www.cepal.org/apps

- Arranz, J. M., Burguillo, M., & Rubio, J.** (2022). Are public transport policies influencing the transport behaviour of older people and economic equity? A case study of the Madrid Region. *Research in Transportation Economics*, 95. <https://doi.org/10.1016/j.retrec.2022.101218>
- Artige, L., Cavenaile, L., Benhabib, J., Borovicka, J., Easterly, W., Jovanovic, B., Lejeune, B., Mongey, S., Prettnner, K., Ravikumar, B., Roldan, P., Schaal, E., & Sousa-Poza, A.** (2023). Public Education Expenditures, Growth and Income Inequality. *Journal of Economic Theory*, 209, 105622. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jet.2023.105622>
- Bilan, Y., Mishchuk, H., Samoliuk, N., & Yurchyk, H.** (2020). Impact of Income Distribution on Social and Economic Well-Being of the State. *Sustainability (Switzerland)*, 12(1). <https://doi.org/10.3390/su12010429>
- Birkland, T. A.** (2020). *An Introduction to the Policy Process*. Routledge.
- Bourguignon, R., & Coron, C.** (2023). The micro-politics of collective bargaining: The case of gender equality. *Human Relations*, 76(3), 395–419. <https://doi.org/10.1177/00187267211052472>
- Caballero, J. F.** (2006). La Teoría de la Justicia de John Rawls. *Ibero Forum*, 2(1), 1–22.
- Capello, R.** (2008). Regional economics in its 1950s: Recent theoretical directions and future challenges. *Annals of Regional Science*, 42(4), 747–767. <https://doi.org/10.1007/s00168-007-0185-8>
- Daly, H. E., & Farley, J.** (2009). *Ecological Economics: Principles And Applications*. Island Press.
- Dang, H. A. H., Pullinger, J., Serajuddin, U., & Stacy, B.** (2023). Statistical performance indicators and index—a new tool to measure country statistical capacity. *Scientific Data*, 10(1). <https://doi.org/10.1038/s41597-023-01971-0>
- De Neve, J. E., & Sachs, J. D.** (2020). The SDGs and human well-being: a global analysis of synergies, trade-offs, and regional differences. *Scientific Reports*, 10(1). <https://doi.org/10.1038/s41598-020-71916-9>
- Dix-Carneiro, R., & Traiberman, S.** (2023). Globalization, Trade Imbalances and Inequality. *Journal of Monetary Economics*, 133, 48–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2022.10.002>
- Dorlach, T.** (2023). Social Policy Responses to Covid-19 in the Global South: Evidence from 36 Countries. *Social Policy and Society*, 22(1), 94–105. <https://doi.org/10.1017/S1474746422000264>
- Erkkilä, T.** (2023). Global indicators and AI policy: Metrics, policy scripts, and narratives. *Review of Policy Research*. <https://doi.org/10.1111/ropr.12556>
- Facchinetti, S., & Siletti, E.** (2022). Well-being Indicators: a Review and Comparison in the Context of Italy. *Social Indicators Research*, 159(2), 523–547. <https://doi.org/10.1007/s11205-021-02761-0>

- Fachelli, S., López-Roldán, P., & Segura-Carrillo, C.** (2023). La incidencia de la experiencia laboral en la movilidad social intergeneracional en España. *Revista Internacional de Sociología*, 81(2), 1–23. <https://doi.org/10.3989/ris.2023.81.2.m22b-005>
- Fischer, F.** (2019). *Politics, Values, and Public Policy: The Problem of Methodology*. Routledge.
- García, H. J. A.** (2015). Determinación del índice físico de calidad de vida en el Estado de Tabasco. *EconoQuantum*, 2(2). <https://doi.org/10.18381/eq.v2i2.243>
- García, H. J. A., Reyes, de la C. C., & Mandujano, C. J. C.** (2021). Índice Físico de Calidad de Vida en la Región Sur de México 1990-2020. In E. S. De la Vega & C. M. del P. Mora (Eds.), *Estudios Sobre Cultura y Desigualdad en las Regiones (Vol. IV)*. Universidad Nacional Autónoma de México. <http://ru.iiiec.unam.mx/5568/>
- Gutiérrez, V. L., & Muñoz, F. N.** (2022). La Desigualdad Económica en Chile en el Contexto de la Agenda 2030: Análisis de las Acciones Públicas. *Estudios Internacionales*, 2003, 87–127.
- Halkos, G. E., & Aslanidis, P. S. C.** (2023). Causes and Measures of Poverty, Inequality, and Social Exclusion: A Review. *Economies*, 11(4). <https://doi.org/10.3390/economies11040110>
- Hong, D. V., Cong, T. N., Phu, N. T., & The, A. V.** (2019). What Factors Affect Income Inequality and Economic Growth in Middle-Income Countries? *Journal of Risk and Financial Management*, 12(1), 40. <https://doi.org/10.3390/jrfm12010040>
- Hortal, A.** (2023). Fighting gender violence with behavioral public policy: scope and limitations. *Retos(Ecuador)*, 13(25), 61–65. <https://doi.org/10.17163/ret.n25.2023.05>
- Hudson, B., Hunter, D., & Peckham, S.** (2019). Policy failure and the policy-implementation gap: can policy support programs help? *Policy Design and Practice*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.1080/25741292.2018.1540378>
- Kappes, S. A.** (2023). Monetary Policy and Personal Income Distribution: A Survey of the Empirical Literature. *Review of Political Economy*, 35(1), 211–230. <https://doi.org/10.1080/09538259.2021.1943159>
- Kraft, M. E., & Furlong, S. R.** (2006). *Public Policy Seventh Edition*. SAGE.
- Lowi, T. J.** (1971). Four Systems of Policy, Politics, and Choice. *Public Administration Review*, 32(4), 69. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/974990>
- Makhlouf, Y.** (2023). Trends in Income Inequality: Evidence from Developing and Developed Countries. *Social Indicators Research*, 165(1), 213–243. <https://doi.org/10.1007/s11205-022-03010-8>
- McKay, A., & Wolf, C. K.** (2023). Monetary Policy and Inequality. *Journal of Economic Perspectives*, 37(1), 121–144. <https://doi.org/10.1257/jep.37.1.121>
- Mende, J.** (2021). Are human rights western—And why does it matter? A perspective from international political theory. *Journal of International Political Theory*, 17(1), 38–57. <https://doi.org/10.1177/1755088219832992>

- Merino, M.** (2013). *Políticas Públicas Ensayo Sobre la Intervención del Estado en la Solución de los Problemas Públicos*. Centro de Investigación y Docencia Económicas.
- Mondragón, A. R.** (2002). ¿Qué son los Indicadores? *Revista de Información y Análisis*, 19, 52–58.
- Mueller, B.** (2020). Why public policies fail: Policymaking under complexity. *Economía*, 21(2), 311–323. <https://doi.org/10.1016/j.econ.2019.11.002>
- Naciones Unidas.** (1961). *Definición y Medición Internacional del Nivel de Vida*.
- Naciones Unidas.** (2018). *La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe*. www.issuu.com/publicacionescepal/stacks
- Nussbaum, M. C.** (2006). Poverty and Human Functioning: Capabilities as Fundamental Entitlements. In B. , D. Grusky & R. Kanbur (Eds.), *Poverty and Inequality* (pp. 47–75). Stanford University Press.
- Odhiambo, N. M.** (2023). Revisiting the finance-growth nexus in sub-Saharan Africa: Does the level of income inequality matter? *Research in Globalization*, 6. <https://doi.org/10.1016/j.resglo.2023.100126>
- Organización de las Naciones Unidas.** (2012). *Los Principios Rectores sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos*.
- Parsons, D. W.** (2007). *Políticas Públicas : Una Introducción a la Teoría y la Práctica del Análisis de Política Pública*. FLACSO México.
- Peláez-Herrerros, Ó.** (2012). Analysis of indicators of human development, marginalization, social backwardness and poverty in the municipalities of Chiapas from a demographic view. *Economía, Sociedad y Territorio*, xii, 181–213.
- Persson, E., & Tinghög, G.** (2020). Opportunity cost neglect in public policy. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 170, 301–312. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2019.12.012>
- Ríos, J. F., Angarita, de la C. B., Vargas, L. C., & Azcárate, S. J.** (2023). Factores de Movilidad Social en un Sector Rural de Colombia. *Revista de Ciencias Sociales*, 29(1), 169–185.
- Rochat, M.** (2023). The determinants of growing economic inequality within advanced democracies. *International Review of Economics*. <https://doi.org/10.1007/s12232-023-00427-6>
- Rodríguez, E. F.** (2021). *Políticas Públicas y Su Focalización A Programas Públicos del Sector Social*. Miguel Ángel Porrúa.
- Sen, A.** (1979). *Equality of What?*
- Sen, A.** (2000). A Decade of Human Development. *Journal of Human Development*, 1(1), 17–23. <https://doi.org/10.1080/14649880050008746>
- Sen, A.** (2005). Human Rights and Capabilities. *Journal of Human Development*, 6(2), 151–166. <https://doi.org/10.1080/14649880500120491>

- Sitthiyot, T., & Holasut, K.** (2020). A simple method for measuring inequality. *Palgrave Communications*, 6(1). <https://doi.org/10.1057/s41599-020-0484-6>
- Stiglitz, J. E.** (2000). Capital Market Liberalization, Economic Growth, and Instability. *World Development*, 28(6), 1075–1086. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(00\)00006-1](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0305-750X(00)00006-1)
- Tamayo, M. S.** (1997). El Análisis de las Políticas Públicas. In R. Bañón & E. Carrillo (Eds.), *La Nueva Administración Pública* (pp. 281–312).
- Vedung, E.** (2022). Modelos de Evaluación de Programas y Políticas Públicas. *Cuadernos Del CEDEOP*, 1, 4–97. www.economicas.uba.ar
- Velandia-Moralesa, A., Rodríguez-Bailón, R., & Martínez, R.** (2021). Consumo estatutario y desigualdad económica. *Universitas Psychologica*, 20. <https://doi.org/10.11144/JAVERIANA.UPSY20.CEDE>
- Vu, T. V.** (2023). Long-term relatedness and income distribution: understanding the deep roots of inequality. *Oxford Economic Papers*, 75(3), 704–728. <https://doi.org/10.1093/oep/gpac038>
- Yuda, T. K., Pratiyudha, P. P., & Kafa, K. A.** (2023). Managing social policy in the emerging welfare regime of governance: What Indonesia can learn from South Korea's experience. *International Social Work*, 66(2), 357–372. <https://doi.org/10.1177/00208728211011634>
- Zhou, Y., & Liu, Y.** (2022). The geography of poverty: Review and research prospects. *Journal of Rural Studies*, 93, 408–416. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.01.008>